



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 21/08/2020

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00129-00
Medio de control o Acción	Conciliación Extrajudicial
Demandante	Franklin Miguel Pérez Martínez
Demandado	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.
Juez(a)	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor Juez, paso a su despacho, informándole que la Procuraduría 61 Judicial Administrativa de esta ciudad, envía el presente expediente de conciliación extrajudicial para su pronunciamiento.

PASA AL DESPACHO
Para analizar eventual aprobación.

CONSTANCIA
Carpeta comprimida con 9 archivos que componen el expediente + hoja de reparto.

ALBERTO OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020).

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00129-00
Medio de control o Acción	Conciliación Extrajudicial
Demandante	Franklin Miguel Pérez Martínez
Demandado	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.
Juez(a)	Guillermo Osorio Afanador

I. ANTECEDENTES

Mediante solicitud radicada ante la Procuraduría 61 Judicial I para asuntos Administrativos, el señor Franklin Miguel Pérez Martínez, a través de apoderado, solicitó se convoque a Conciliación Extrajudicial a la Nación – Ministerio de Defensa – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el objeto de conciliar el pago del retroactivo del reajuste de las partidas computables de subsidio de alimentación, duodécima parte de la prima de servicio, duodécima parte de la prima de navidad, y duodécima parte de la prima vacaciones.

Mediante auto de fecha 13 de mayo de 2020, fue admitida la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 11 del mismo mes y año, fijándose fecha para la Audiencia el 09 de julio de 2020.

La audiencia no pudo ser realizada en la fecha mencionada, por solicitud de aplazamiento presentado por el apoderado de la parte convocada, por lo que fue fijada como nueva fecha el 30 de julio de 2020.

En dicha fecha fue celebrada la audiencia, en la que estuvieron presentes el apoderado de la parte convocante, abogado JHONY FERNANDO PASTRANA MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.014.243.861 y T. P 318.156 del C.S. de la J., y en calidad de apoderado de la parte convocada el Dr. SAMUEL ANTONIO ORJUELA OCHOA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 72.204.086 y T.P. N° 137.728 del C.S. de la J. Ambos apoderados contaban con facultades expresas para conciliar en representación de las partes del proceso de la referencia.

En desarrollo de la diligencia se estableció:

“(…) En este estado de la diligencia se insta a las partes para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual, el apoderado manifestó que se ratifica en sus pretensiones.

PRIMERA: Que se declare la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO número 20201200- 010068841 ID: 550846 de fecha 10 de marzo de 2020, proferido por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL; decisión administrativa por medio de la cual negó el pago retroactivo del reajuste de las partidas computables de SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, DUODÉCIMA PARTE DE LA PRIMA DE SERVICIO, DUODÉCIMA PARTE DE LA PRIMA DE NAVIDAD, DUODÉCIMA PARTE DE LA PRIMA VACACIONES. SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad y a título de



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ordene a LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, realice el pago retroactivo del reajuste de las partidas computables de SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, DUODÉCIMA PARTE DE LA PRIMA DE SERVICIO, DUODÉCIMA PARTE DE LA PRIMA DE NAVIDAD, Y DUODÉCIMA PARTE DE LA PRIMA VACACIONES. TERCERO: Que se condene a la demandada CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, dar cumplimiento a la sentencia en los términos del inciso segundo del artículo 192, intereses de acuerdo con el inciso tercero del artículo 192 analizando o ajustadas las sumas de conformidad con el inciso cuarto del artículo 187 de la ley 1437 de 2011. CUARTO: Se condene en costas y agencias en derecho a la demandada CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL.

SE concede el uso de la palabra al apoderado de la entidad convocada CASUR, para que exprese la decisión adoptada, por el comité de conciliación:

BOGOTÁ, D.C 28 DE JULIO DE 2020. DEMANDANTE: IJ ® FRANKLIN MIGUEL PEREZ MARTINEZ. C.C. NO. 72.153.180 AUTORIDAD: PROCURADURÍA 61 I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BARRANQUILLA. APODERADO CASUR: SAMUEL ANTONIO ORJUELA OCHOA CONVOCADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL- CASUR. ASUNTO: PARTIDAS COMPUTABLES El comité de conciliación y defensa judicial mediante Acta 31 del 23 de JULIO de 2020 considero: El presente estudio, se centrará, en determinar, si el IJ ® FRANKLIN MIGUEL PEREZ MARTINEZ. C.C. No. 72.153.180 tiene derecho al reajuste y pago de su Asignación mensual de retiro por concepto de PARTIDAS COMPUTABLES desde el año 2015, a la fecha, como Intendente Jefe en uso de buen retiro de la Policía Nacional. 2.- Por ser derechos ciertos e indiscutibles el derecho como tal no tiene caducidad, se debe de tomar la prescripción trienal contenida en el decreto 4433 de 31 de diciembre 2004, “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”, en su artículo 43; así: ARTÍCULO 43. Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las pensiones previstas en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por la autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, por un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasaría a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es decir desde el momento en que el R3DkODE-39 Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional RADICADO derecho se hizo exigible esto es el 31 de enero de 2020, día en que el hoy convocante IJ ® FRANKLIN MIGUEL PEREZ MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.153.180, elevó derecho de petición radicado el día 31 de enero de 2020, el cual fue resuelto de manera desfavorable en sede administrativa, donde la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL “CASUR”, negó lo solicitado por el actor en sede administrativa tomándose la Prescripción trienal desde el día 31 de enero de 2017 a la fecha de realización de la Audiencia de conciliación esto es el día 30 de julio de 2020. 3.- Evitar condena en Costas y Agencias en Derecho en contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL. Es dable reconocer y pagar al IJ ® FRANKLIN MIGUEL PEREZ MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.153.180, la asignación de retiro en un (79%) de lo que devenga un INTENDENTE JEFE de la Policía Nacional aplicando lo establecido en el Decreto 4433 del año 2004, artículo 42 y Ley 923 2004, artículo 2, numeral 2.4 (principio de oscilación), con respecto al reajuste anual y liquidación de la prima de servicios, vacaciones, navidad y subsidio de alimentación desde el 20 de abril de 2015, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda Se debe de cancelar teniendo en cuenta las políticas establecidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en el Acta No. 16 del 16 de enero del año 2020, ratificación Política Institucional para la prevención



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

del daño antijurídico numeral 1 ACTUALIZACIÓN PARTIDAS NIVEL EJECUTIVO, del Comité de Conciliaciones CASUR; así; Una vez aprobada la conciliación por el Juez Administrativo, el Apoderado convocante allegará los documentos a CASUR y la entidad pagará dentro de los seis (6) meses siguientes, una vez radicada la documentación ante la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL. Una vez revisado el expediente administrativo enviado por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR, SE VERIFICA que no reposa documento alguno en que conste que al IJ ® FRANKLIN MIGUEL PEREZ MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.153.180, haya recibido valor alguno por concepto de ACTUALIZACION DE PARTIDAS DE NIVEL EJECUTIVO, por parte de la entidad. En los anteriores términos al comité de conciliación y defensa jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, determina que para el presente asunto le asiste ánimo conciliatorio.

*LIQUIDACIÓN PEREZ MARTINEZ FRANKLIN MIGUEL 72.153.180
CONCILIACION Valor de Capital Indexado 3.895.809 Valor Capital 100%
3.697.459 Valor Indexación 198.350 Valor indexación por el (75%) 148.763 Valor
Capital más (75%) de la Indexación 3.846.222 Menos descuento CASUR -129.802
Menos descuento Sanidad -133.198 VALOR A PAGAR 3.583.222. (...)"*

La parte convocante aceptó la propuesta presentada por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público avaló el acuerdo conciliatorio manifestado que "(...)Teniendo en cuenta lo manifestado por la parte convocante y convocada y no observándose razón jurídica alguna para presentar objeción, la suscrita procuradora declara que entre las mismas se ha celebrado un acuerdo conciliatorio en forma integral mediante el cual se reconoce por vía de conciliación extrajudicial el reajuste por aplicación de índice de precios al consumidor a favor del convocante en los términos contenidos en esta presente diligencia, en tal sentido se ordena remitir al Juzgado Administrativo de Barranquilla (reparto), para que se pronuncie en cuanto a si lo aprueba o no, lapso en el cual este acuerdo no producirá efecto jurídico alguno en tanto se ejecutoria el auto que lo apruebe. Igualmente se deja constancia que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento y reúne los siguientes requisitos: (i) el eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998); (ii) el acuerdo conciliatorio versa sobre sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998); (iii) las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; (iv) obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo. En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo del Circuito de Barranquilla, advirtiendo a los comparecientes que el Auto aprobatorio junto con la presente acta del acuerdo, prestarán mérito ejecutivo, y tendrán efecto de cosa juzgada razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por las mismas causas (art. 73 Ley 446 de 1998 y 24 Ley 640 de 2001)."



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

II. CONSIDERACIONES

Este Juzgado, en cumplimiento de lo establecido en las normas legales sobre conciliación, contenidas en la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y decreto reglamentario 1716 de 2009, pasa a revisar el acuerdo conciliatorio de la referencia, a fin de determinar si procede o no su aprobación.

De haberse desatado un conflicto judicial entre las partes, sería de contenido patrimonial, y podría ser dilucidado ante esta Jurisdicción, a través del medio de control correspondiente, por lo que cumple con el requisito de procedibilidad de que habla el artículo 37 de la Ley 640 de 2001.

2.1. Conciliación extrajudicial efectuada

La conciliación extrajudicial que se trae a este Despacho Judicial, celebrada el 30 de julio de 2020, ante la Procuraduría 61 Judicial I para asuntos Administrativos, lo es en relación con el reconocimiento y pago del retroactivo del reajuste de las partidas computables subsidio de alimentación, duodécima parte de la prima de servicio, duodécima parte de la prima de navidad, y duodécima parte de la prima vacaciones.

Se concilió la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$3.583.222).

2.2. Consideraciones del Ministerio Público

El Delegado del Ministerio Público ante quien se surtió la presente conciliación extrajudicial, avaló el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes y solicitó al despacho que conociera de la misma, impartir aprobación, tomando como fundamento que existen pruebas suficientes para ello y que además dicho acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento ya que se encuentra establecido que el pago se realizará una vez ejecutoriado el auto que aprueba la conciliación, el acuerdo se ajusta al ordenamiento legal y no resulta lesivo para el patrimonio público.

2.3. Requisitos para la aprobación de las conciliaciones extrajudiciales.

La Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, fue introducida en nuestra legislación por la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015; además, por la Ley 1285 de 2009 mediante la cual se reformó la Ley 270 de 1996. En los procesos contenciosos administrativos sólo es procedente en los conflictos de carácter particular y de contenido económico, es decir, aquellos que se tramiten en ejercicio de las acciones previstas en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En la Parte III, Título I, Capítulo 2, de la Ley 446 de 1998, se establecen las normas generales aplicables a la conciliación contenciosa administrativa, y en relación con los aspectos sustanciales necesarios para aprobar un acuerdo conciliatorio, el artículo 73 dispone:

“Art. 73. Competencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo, así:
“Artículo 65 A. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el Magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única. (...)

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público” (negrilla fuera de texto).

El H. Consejo de Estado, en providencia del 20 de febrero de 2014¹, señaló, reiterando la posición que ha mantenido al respecto, que la conciliación se encuentra sometida a los siguientes supuestos de aprobación²:

“8. El artículo 73 de la Ley 446 de 1998, establece que la autoridad judicial *“(…) improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público”* y el parágrafo segundo del artículo 81 de la misma ley – modificadorio del artículo 61 de la Ley 23 de 1991- dispone que *“No habrá lugar a conciliación cuando la acción correspondiente haya caducado”*.

De acuerdo con lo anterior, los principales criterios que deben ser analizados para efectos de determinar la procedencia de la aprobación del acuerdo conciliatorio al que hayan llegado las entidades estatales, dentro o fuera de un proceso judicial, son:

- Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.
- Que las entidades estén debidamente representadas.
- Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto del convenio.
- Que no haya operado la caducidad de la acción.
- Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.
- Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrojado a la actuación.
- La conciliación administrativa prejudicial sólo tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviere agotada (art. 81, L. 446 de 1998, art.63, Decreto 1818 de 1998).”

2.4. CASO CONCRETO

Revisado el expediente, se advierte que en el mismo se encuentran las siguientes pruebas arrojadas con la solicitud:

- Poder para actuar con la facultad expresa de conciliar.
- Derecho de petición presentado ante CASUR por el señor Franklin Pérez el 31 de enero de 2020.
- Copia del Oficio No. número 20201200-010068841 ID: 550846 de fecha 10 de marzo de 2020, proferido por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL; decisión administrativa por medio de la cual negó la petición presentada por el convocante.
- Copia de Hoja de Servicios No. 72153180 emanada por la Dirección de Personal de la Policía Nacional del señor Franklin Miguel Pérez Martínez.

¹ H. CONSEJO DE ESTADO. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Providencia 20 de febrero de 2014, Expediente Radicación N°. 25000232600020100013401 (42.612). C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

² Ver, entre otras, las providencias radicadas bajo los números: 21.677, 22.557, 23.527, 23.534 y 24.420 de 2003, Sección Tercera.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

- Resolución 2562 del 20 de abril de 2015, por medio del cual se le reconoce una asignación de retiro al señor Franklin Miguel Pérez Martínez.

Asimismo, dentro de la audiencia de conciliación fueron allegados los siguientes documentos:

- Poder otorgado con copia autenticada de certificado de representación legal.
- Copia del Certificado de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación del 28 de julio de 2020.
- Cuadro de Pre-liquidación de la indexación del IPC.
- Cuadros de reajustes propuestos por CASUR.

Este Despacho de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 73 y 81 de la Ley 446 de 1998 al igual que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001 y 12 del Decreto 1716 de 2009, pasará a revisar el acuerdo conciliatorio en comento.

Ahora bien, realizadas las acotaciones anteriores, advierte el Despacho que el trámite conciliatorio bajo estudio, es susceptible de aprobación, por lo siguiente:

Para el Juzgado es claro que de haberse desatado un conflicto judicial entre las partes, éste sería de contenido patrimonial, y podría ser dirimido ante esta Jurisdicción, a través del medio de control contencioso administrativo establecido para tal efecto, por tratarse de diferencias suscitadas en virtud de una relación laboral. Por consiguiente, cumple con el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 37 de la Ley 640 de 2001.

Así mismo, la conciliación fue suscrita entre los apoderados especiales de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y del señor Franklin Miguel Pérez Martínez, quienes otorgaron a sus apoderados judiciales la facultad de conciliar, por lo que estuvieron debidamente representadas en el trámite conciliatorio.

Ante la Procuraduría 61 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla fueron allegados por la parte convocante los documentos que acreditan que con el acuerdo conciliatorio no se generaría lesión a intereses patrimoniales del Estado.

En efecto estima el Despacho que el acuerdo conciliatorio está lo suficientemente sustentado, en la medida que obra en el expediente copia de la Resolución 2562 del 20 de abril de 2015, por medio de la cual se reconoce una asignación de retiro al señor Franklin Miguel Pérez Martínez.

Sobre este requisito es pertinente señalar que pese a que la pensión es un derecho irrenunciable, y que por tanto, en principio no procede la conciliación prejudicial, se ha entendido que cuando no se menoscaban los derechos irrenunciables, sino que por el contrario, la conciliación prejudicial protege el derecho, se concluye la procedencia de la conciliación prejudicial.

En el presente caso, no se están desconociendo derechos irrenunciables en la medida que el capital adeudado por concepto de mesadas pensionales se reconoce en un 100%, conciliando las partes sólo en relación con la indexación, la cual, puede conciliarse por tratarse de un derecho puramente económico. En este último punto, se concilió el pago del 75%.

Al respecto, estima el Despacho pertinente citar el pronunciamiento del H. Consejo de Estado en la materia, cuyas consideraciones resultan aplicables a la presente *litis*.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“Así, pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen fin a controversias referentes a los derechos laborales de los cuales se trata en sus textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de renuncia se tienen por no escritas y no pueden oponerse válidamente a las pretensiones del reclamante si lo que éste pide es la efectividad del derecho irrenunciable.”³

(...)

Así las cosas, siendo legal en sí misma la audiencia de conciliación como etapa procesal, se debe reiterar que: “Esta apreciación debe entenderse en el sentido de que no puede transigirse menoscabando los derechos fundamentales. Pero, cosa diferente es que se llegue a un acuerdo que precisamente conlleve la protección del derecho fundamental”⁴

Así en cada caso se debe analizar si la conciliación conllevó realmente a “allanamiento del ente accionado a los hechos presentados por el accionante que dio como resultado un acuerdo sobre las alternativas técnicas para superar la violación del derecho.”⁵

Por tanto se insiste en que si como resultado de la audiencia de conciliación, se protege el derecho reclamado en el proceso en razón de la fórmula de arreglo, que es aceptada por las partes y avalada por el conciliador, quien vela porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, dicho acuerdo debe tenerse como válido^{6,7}

Además, como prueba de los valores conciliados se encuentra el Certificado del Comité de Conciliación de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y obra liquidaciones del valor a reajustar.

Así las cosas, el acuerdo conciliatorio no sólo encuentra fundamento probatorio, sino que encuentra asidero jurídico, en la medida que parte de la consideración que las asignaciones de retiro deben actualizarse con base en el IPC, cuando éste incremento resulta más favorable que el principio de oscilación, teniendo como límite máximo la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, momento a partir del cual opera nuevamente dicho principio.

Pasa a continuación el Despacho a referirse al marco normativo aplicable al reajuste de la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y las partidas que integran dicha prestación:

El artículo 49 del Decreto 1091 de 1995 “Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”, determina cuáles son las partidas computables dentro de las prestaciones causadas por el retiro del servicio del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, así:

“Artículo 49. Bases de liquidación. A partir de la vigencia del presente decreto, al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que sea retirado del servicio activo, se le liquidará las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas.

³ Sentencia T-1008-99 del 9 de diciembre de 1999, M.P José Gregorio Hernández Galindo.

⁴ T-232 de 1996, M.P Alejandro Martínez Caballero.

⁵ T-677 de 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra

⁶ T-677 de 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra

⁷ Consejo de Estado. Sección Segunda. Providencia de 14 de junio de 2012. Radicación número 25000-23-25-000-2008-01016-01 (1037-11). C.P Gerardo Arenas Monsalve.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

- a) Sueldo básico;
- b) Prima de retorno a la experiencia;
- c) Subsidio de Alimentación;
- d) Una duodécima parte (1/12) de la prima de navidad;
- e) Una duodécima parte (1/12) de la prima de servicio;
- f) Una duodécima parte (1/12) de la prima de vacaciones;

Parágrafo. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en los decretos 1212 y 1213 de 1990 y en el presente decreto, serán computables para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensionados, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.”

Por su parte, el Decreto 4433 de 2004 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”, en su artículo 23, ratifica las partidas computables dentro de las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública, al consagrar:

“Artículo 23. Partidas computables. La asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto del personal de la Policía Nacional, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:

23.1 Oficiales, Suboficiales y Agentes

23.1.1 Sueldo básico.

(....)

23.2 Miembros del Nivel Ejecutivo

23.2.1 Sueldo básico.

23.2.2 Prima de retorno a la experiencia.

23.2.3 Subsidio de alimentación.

23.2.4 Duodécima parte de la prima de servicio.

23.2.5 Duodécima parte de la prima de vacaciones.

23.2.6 Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de la asignación de retiro, las pensiones, y las sustituciones pensionales..”

Posteriormente, se emitió el Decreto 1858 de 6 de septiembre de 2012 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”, estatuto que en su artículo 3º consagró en materia de partidas computables, lo siguiente:



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“Artículo 3º. Fíjense como partidas computables de liquidación dentro del régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó a la institución antes del 1º de enero de 2005, previsto en el presente decreto, las siguientes:

1. Sueldo básico.
2. Prima de retorno a la experiencia.
3. Subsidio de alimentación.
4. Duodécima parte de la prima de servicio.
5. Duodécima parte de la prima de vacaciones.
6. Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.”.

Son estas partidas que por disposición legal están llamadas a ser incluidas dentro de la asignación de retiro como parte integral de esta prestación. En otro aspecto, es pertinente señalar que el principio de oscilación de las asignaciones de retiro y de las asignaciones y pensiones del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, fue consagrado en el artículo 56 del Decreto 1091 de 1995, así:

“Artículo 56. Oscilación de asignaciones de retiro y pensiones. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto. En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal. El personal del nivel ejecutivo o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley”.

Posteriormente, el Decreto 4433 de 2004, dispuso respecto del mecanismo de oscilación de asignaciones de retiro y pensión:

“ARTÍCULO 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.”.

De conformidad con las disposiciones en cita, se colige que las asignaciones de retiro y pensiones de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, deben ser incrementadas de forma anual en la misma proporción en que se acrecientan las asignaciones de quienes están en servicio activo, para efectos de evitar que pierdan su valor adquisitivo.

Al respecto, es importante traer a colación lo dispuesto en un pronunciamiento reciente por el H. Consejo de Estado y que constituye postura unificada en la materia:

“La Sala manifiesta que de manera consistente y uniforme, a partir de la sentencia del 17 de mayo de 2007, ha insistido en que los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho al reajuste de su asignación de retiro, anualmente, y teniendo en cuenta la Ley 238 de 2005. En consecuencia, el reajuste para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 tiene lugar



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

de conformidad con el IPC, en tanto resulta más favorable que el resultante de la aplicación del principio de oscilación. A partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, el reajuste no se hace más de acuerdo con el IPC, sino aplicando el índice de oscilación previsto en el artículo 42 de aquel decreto, pero en todo caso, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó con base en la variación porcentual del IPC respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

- Una interpretación contraria desconocería los artículos 48 (inciso 6) y 53 (inciso 3) de la Constitución, que contemplan el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada, el cual, en últimas, es un desarrollo del derecho a la igualdad, de la protección especial sobre las personas de la tercera edad, de la protección al mínimo vital y móvil. Una prestación pensional es el medio que permite amparar a un trabajador de las contingencias a las que se puede enfrentar en desarrollo de su actividad laboral (vejez, invalidez, muerte), entonces, negar el derecho a su reajuste afectaría su capacidad de subsistencia y la de su entorno familiar. Para respaldar este argumento, la Sala cita la sentencia T-020 de 2011, del magistrado ponente Humberto Sierra Porto, de la Corte Constitucional.

- La posición de la Sala no genera un doble reajuste. Además, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 promueve el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, en ningún caso, este principio puede servir de excusa para desconocer derechos adquiridos como el reajuste de la asignación de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares.”⁸

Asimismo, encontramos que el Gobierno Nacional para la Vigencia 2019 expidió el Decreto 1002 del 06 de junio de 2019, por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de la fuerza pública, entre otros, disposición que estableció un ajuste de los salarios y prestaciones del 4.5% retroactivo a partir del 1° de enero 2019.

Adicionalmente, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, dispuso la realización del reajuste porcentual del monto de las partidas que desde su génesis permanecieron fijas en la prestación reconocida, de acuerdo con la base de liquidación que conforman la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, actualización que se realiza a partir del reconocimiento y que se evidencia en la prestación a partir del 1° de enero de 2020, tal como se aplicó en el caso del convocante.

En razón de tales fundamentos fácticos y jurídicos puede concluirse que el acuerdo conciliatorio no resulta lesivo para el patrimonio público, sobre todo considerando que se está aplicando la respectiva prescripción trienal, conforme al artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

Por las razones expuestas, considerando que el acuerdo conciliatorio cumple los requisitos formales y materiales, el Despacho procederá a impartirle aprobación al mismo.

Así las cosas, este operador judicial considera que resulta procedente impartir aprobación al acuerdo conciliatorio en cuanto a que no hay renuncia de derechos laborales ciertos; se tiene que la conciliación presentada no está viciada de nulidad y que verificado que se reúnen las condiciones legales para su aprobación, en cuanto a que este operador judicial tiene competencia para ello, no opera el fenómeno de la caducidad, que se estableció lo

⁸ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Fecha: 15 de noviembre de 2012 Radicación número: 2500023250002010005111 01.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

concerniente a la prescripción trienal, fueron determinadas las formas de pago, se allegó constancia del Comité de Conciliación y las partes están legitimadas para conciliar, adicionalmente, la entidad convocada se compromete a pagar al señor **FRANKLIN MIGUEL PEREZ MARTINEZ**, el retroactivo del reajuste del 4.5% de las partidas computables de subsidio de alimentación, duodécima parte de la prima de servicio, duodécima parte de la prima de navidad, y duodécima parte de la prima vacaciones que integran su asignación de retiro, en la forma como fue pactado ante la Procuraduría 61 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla, con la aclaración de que la aprobación que hace el Juzgado es en los mismos términos en que fue autorizada por el comité de conciliación. Es decir, en cuanto a que la conciliación comprende el pago del 100% del capital adeudado y el 75% de la indexación.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,

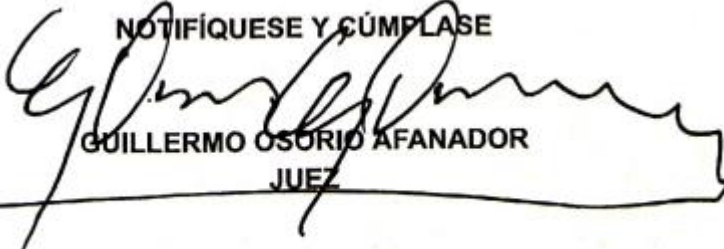
RESUELVE:

PRIMERO. – APROBAR el acuerdo conciliatorio suscrito por el señor FRANKLIN MIGUEL PEREZ MARTINEZ y la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, el día treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) ante el Procurador 61 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla, conforme a las razones anotadas en esta providencia.

SEGUNDO. – Por Secretaría, se expedirán las copias respectivas con constancia de su ejecutoria.

TERCERO.- Ejecutoriado este auto y surtido el trámite anterior, háganse las respectivas anotaciones en el sistema y archívese el expediente.

CUARTO: Notificar el presente auto por estado electrónico, de la forma prevista en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 089 DE HOY 24/08/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA